

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital. 40
Un semestre id. id. . . . 6
Un trimestre id. id. . . . 4
Números sueltos 0'25
Se publica todos los días excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la Gaceta.—
(Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
del
CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.), y Augusta Real familia continúan en San Sebastian sin novedad en su importante salud.

REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de Segovia y el Juzgado de primera instancia de dicha capital, de los cuales resulta:

Que aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad de Segovia un proyecto de alumbrado público por medio de la electricidad, para cuyo establecimiento fué anunciada la subasta pública en el *Boletín oficial* de la provincia correpondiente al 11 de Diciembre de 1889, estableciéndose en la base 5.ª del pliego de condiciones lo siguiente: «El alumbrado eléctrico se considerará en esta ciudad de servicio público para todos los efectos de la expropiación, servidumbres y demás que afecte a la propiedad particular, siendo de cuenta del concesionario el abono de las indemnizaciones que por este concepto correspondan, y el de los desperfectos que se causen al colocar en los edificios los soportes, aisladores, etc. El Ayuntamiento se obliga, como entidad oficial, a obtener la declaración de utilidad pública de este servicio, si fuera preciso, y a la resolución por su cuenta de los expedientes y cuestiones a que tal declaración diere motivo».

Que hecha la adjudicación del indicado servicio a la Empresa denominada *Sociedad Electricista de Segovia*, comenzó ésta sus trabajos de instalación del alumbrado con la aquiescencia de unos propietarios de fincas, así rústicas como urbanas, y la oposición de otros que, como D. Estanislao Marañón y

D. Evaristo Gonzalez, dueños de unas casas situadas en la calle de Los Leones, números 36 y 38, y en la de la Cabritería, núm. 8, los cuales, rechazando el que sobre las fachadas de dichas casas se estableciese ningún género de servidumbre con motivo de las obras en ejecución, cuyo acuerdo había tomado el Ayuntamiento, por lo que a los dichos dos propietarios se referían, en 29 de Octubre de 1890, imponiéndoles la servidumbre de alumbrado; recurrieron del mismo ante el referido Ayuntamiento, que desestimó las respectivas instancias, declarando no haber lugar a la suspensión del acuerdo recurrido.

Que así las cosas, y a virtud de los hechos apuntados con fecha 5 de Diciembre de 1890, el Procurador don Segundo Sastre y Santos, en representación de los referidos Marañón y Gonzalez, que se creyeron perturbados en la posesión de sus respectivas propiedades, dedujo ante el Juzgado de primera instancia de la capital demanda documentada de interdicto de retener ó recobrar la posesión, fundándole en los argumentos legales que estimó oportunos, y ofreciendo información sobre estos dos puntos: primero; que los demandantes se hallaban en posesión de las casas sobre que se pretendía imponer la servidumbre; y segundo, que habían sido inquietados ó perturbados en ellas, y tenían fundados motivos para creer que lo serían en mayor grado, pues además de haberse colocado de orden del Ayuntamiento un poste de sostenimiento, tocando la fachada de una de las referidas casas y haciendo fácil el acceso a las habitaciones de la misma de la propiedad del Marañón, tanto éste como el otro demandante, intentaba el Ayuntamiento de la capital imponer la servidumbre del alumbrado por la electricidad, obligándoles a que consintieran la colocación de los aparatos necesarios en las fachadas de sus fincas, actos que constituían un verdadero conato de despojo.

Que admitida la demanda, practicada la información ofrecida y celebrado el juicio verbal correspondiente, con asistencia del representante del Ayuntamiento de Segovia, como parte demandada, en tal estado el Gobernador de la provincia, a quien había acudido el Alcalde Presidente del referido Municipio, solicitando requiriese de inhibición al Juzgado, aquella Autoridad lo hizo

así, de acuerdo con lo informado por la Comisión provincial, pero limitándose en su oficio de requerimiento a citar las disposiciones legales que estimó pertinentes, sin aducir razón alguna en apoyo de su competencia.

Que sustanciado el incidente, el Juez sostuvo su jurisdicción alegando los fundamentos que creyó conducentes y el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto.

Visto el art. 8.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que dice: «Siempre que el Gobernador requiera de inhibición a un Tribunal ó Juzgado ordinario ó especial, manifestará indispensablemente las razones que le asisten y el texto de las disposiciones legales en que se apoye, para reclamar el conocimiento del negocio».

Considerando que el Gobernador de Segovia, limitándose tan solo a citar disposiciones legales, no ha alegado razón alguna en el oficio de requerimiento al Juzgado para justificar su competencia, con infracción manifiesta del texto legal transcrito, y esta omisión implica un vicio sustancial en el procedimiento que impide por ahora la resolución del conflicto;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar mal formada esta competencia que no ha lugar a decidir la y lo acordado.

Dado en Palacio a dos de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(G. núm. 193.)

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Burgos y la Audiencia de lo criminal de Lerma, de los cuales resulta:

Que en 29 de Octubre de 1890, el Ingeniero Jefe de Montes de la provincia dirigió una comunicación al Alcalde de Covarrubias, por la que, en vista de que el Ayuntamiento del citado pueblo había ingresado en Tesorería 160 pesetas, importe del 10

por 100 de la cantidad en que se le habían tasado leñas y pastos, procedentes del monte Mayor del expresado Ayuntamiento, se le autorizaba para ejecutar dicho aprovechamiento con sujeción al pliego de condiciones y estados publicados en los números 150 y 157 del *Boletín oficial*, debiendo quedar terminado el día 30 de Enero próximo.

Que según manifestó el Alcalde de Covarrubias, en virtud de la autorización antes mencionada, se publicó un bando para que los vecinos pudieran aprovechar las leñas muertas del monte de que se trata, y en 10 de Noviembre de 1890 el guarda de aquel municipio Bernardo Gonzalez dirigió un oficio al Juez municipal denunciando el siguiente hecho:

Que en aquel día en el monte público de dicha población y término denominado la Viganta, encontró al criado del Alcalde interino, Clemente Gonzalez Cana y al del primer Teniente, Policarpo Juarros, haciendo leña de una encina que los mismos habían cortado y de la que habían sustraído dos cargas cada uno; que igualmente denunciaba a Alejo de la Hija y Juan Pardo, vecinos de aquella villa, por haber sustraído éstos una carga de leña cada uno, cuya leña estaba verde.

Que instruidas a consecuencia de la denuncia anterior las oportunas diligencias criminales, por auto de 21 de Enero último, se declaró procesados a Clemente Gonzalez Cano, Policarpo Juarros, Alejo de la Hija Fartigueta y Juan Pardo, y, una vez terminado el sumario, se le elevaron las actuaciones a la Audiencia de lo criminal;

Que en tal estado varios vecinos de Covarrubias acudieron al Gobernador de la provincia para que esta Autoridad suscitara a la judicial la oportuna competencia, como así lo hizo de acuerdo con la Comisión provincial, fundándose en que con arreglo a lo que dispone el párrafo primero artículo 4.º del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, y la doctrina consignada en diferentes Reales decretos, entre ellos el de 14 de Febrero de 1888 y 14 de Abril de 1889, la imposición de multas y demás responsabilidades relativas a la roturación, corta, venta ó beneficios de aprovechamientos forestales sin la autorización competente y al modo y tiempo de efectuar di-

chas operaciones corresponde al Gobernador:

Que sustanciado el conflicto, la Audiencia dictó acto declarando correspondiente el conocimiento del asunto alegando: que era de la competencia de los Tribunales ordinarios, conforme al art. 4.º del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, invocado por el Gobernador, entender en la extracción de los productos de un monte, con ánimo de lucro, hechos que fueron ejecutados por los denunciados y que por tal concepto habían incurrido, no en una infracción de las que están atribuidas á la Autoridad administrativa, sino en el delito que define el art. 530 del Código penal, del exclusivo conocimiento de los Tribunales; que el art. 40 de dicho Real decreto entendido ó interpretado en conjunto tampoco prestaba apoyo al requerimiento, pues si bien en su párrafo primero establece una multa impuesta gubernativamente al que rotura, corta, vende ó beneficia aprovechamientos forestales sin la autorización competente, al modo ó tiempo de efectuar dichas operaciones y por la infracción de reglas para la celebración de subastas, en tal disposición no se comprende la sustracción fraudulenta de productos forestales, que era de lo que se trataba, y, por consiguiente no era de exacta aplicación al caso concreto de autos; que los Reales decretos de 14 de Febrero de 1888 y 14 de Abril de 1889 que como fundamento de la competencia se citaban también en el requerimiento, no eran aplicables al caso en cuestión:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Vista la regla 1.ª del art. 121 del reglamento de Montes, según la cual las multas y demás responsabilidades pecuniarias relativas á la corta, venta ó beneficios de aprovechamientos forestales sin la autorización competente al modo ó tiempo de efectuar dichas operaciones, y las infracciones que se cometan de las reglas establecidas para la celebración de las subastas, serán impuestas por los Gobernadores de provincia en méritos de lo que resulte en cada caso del expediente que se instruya salvo lo que se dispone en el art. 124:

Considerando:

1.º Que concedido á los vecinos de Covarrubias el aprovechamiento de leñas y pastos en el monte común de aquel Ayuntamiento de las extralimitaciones que con tal motivo se cometan, ya se refieran á la corta, venta ó beneficio de productos forestales para los cuales no estuvieran autorizados, ó ya al modo y tiempo de efectuar dichos aprovechamientos, compete el conocimiento y castigo á los Gobernadores en mérito de lo que resulte en cada caso del expediente administrativo que se instruya

2.º Que encontrándose reservado por disposición expresa, así del reglamento como de las Ordenanzas de Montes el castigo del hecho porque se procede á los funcionarios de la Administración, se halla el presente conflicto comprendido en uno de los dos casos en que por excepción pueden los Gobernadores suscribir contiendas de competencia en los juicios criminales, á tenor de lo dispuesto en el número 1.º, art. 3.º, del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á trece de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(Gaceta núm. 201)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES ORDENES

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á la nulidad de las elecciones municipales verificadas en Saviñao, dicho alto Cuerpo ha emitido con fecha 15 del pasado el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden dictada por el Ministerio del digno cargo de V. E., la Sección ha examinado el expediente relativo á la nulidad acordada por la Comisión provincial de Lugo de las elecciones municipales celebradas en Saviñao en 10 de Mayo último.

Resulta de los antecedentes que, á consecuencia de diversas infracciones legales cometidas en las citadas elecciones, la Comisión provincial de Lugo, en sesión de 6 de Junio, acordó: primero, declarar nulas las elecciones de que se trata, y segundo elevar á V. E. certificación de la solicitud que ante aquel Ayuntamiento presentó don José Ramón Armesto y otros; así como también copias de diversas certificaciones que por el mismo fueron solicitadas, para que en su vista V. E. se sirva dictar una disposición que normalice, conforme á los preceptos legales, la Corporación municipal de que se trata.

En la solicitud á que se hace referencia en el acuerdo anterior, se reclamó la nulidad de las elecciones, fundándose: primero, en que el Ayuntamiento de Saviñao se halla ilegalmente constituido, especialmente desde 1887, porque excediendo, según el censo de aquel año y el único padrón de vecindad que hay de fecha posterior (1889) de 10.001 el número de habitantes de dicho Municipio, debía componerse según el art. 35 de la vigente ley Municipal, de un Alcalde, cuatro Tenientes y 13 Regidores, que dan un total de 18 Concejales electos en cinco Colegios, y no de un Alcalde, tres Tenientes y 12 Regidores, que es como viene constituido, y elegidos en menor número de Colegios; y segundo, en que si aquel Ayuntamiento se halla ilegalmente constituido, todos los actos electorales que de él emanan son nulos.

De las certificaciones aparece que en las elecciones de 1887 fueron elegidos ocho Concejales en cuatro Colegios; que en las de 1889 fueron elegidos 10 Concejales en cuatro Colegios; que el número de habitantes del término, según el padrón último, es el de 10.259, y que, según el censo general de población de 1887, aparece el término municipal con la población de 5.017 varones y 5.296 hembras, que hacen un total de 10.313 habitantes.

En tal estado el expediente, se remite á informe de esta Sección, la cual poco ha de necesitar decir á V. E. después de lo terminantemente prescrito en el reciente Real decreto de 24 de Marzo último.

Por este Real decreto se declararon legalmente constituidos todos aquellos Ayuntamientos contra los que no estuviera incoado en aquella fecha algún expediente sobre nulidad de elecciones u otra causa análoga.

Ahora bien; como contra el Ayuntamiento de Saviñao no se había inter-

puesto hasta entonces ninguna reclamación instando la nulidad de las elecciones de que procede, quedó purgado por este Real decreto de todos los vicios de que pudiera adolecer en su constitución, ilegal hasta aquella fecha, á partir de la que no ha podido ni puede admitirse contra el mismo, y por tal motivo reclamación alguna.

Queda pues destruida en su base, la solicitud que al acuerdo de la citada Comisión provincial se acompaña, pues que habiendo quedado el Ayuntamiento de que se trata legalmente constituido desde la fecha del citado Real decreto de 24 de Marzo, son perfectamente legales, y por consiguiente válidos, todos los actos en que con posterioridad haya intervenido y en lo sucesivo intervenga.

Como contra el acuerdo de la citada Comisión provincial de Lugo declarando nulas las elecciones de que se trata no se ha recurrido ante V. E.;

La Sección opina que lo que procede es confirmar el acuerdo de la Comisión provincial declarando nulas las elecciones últimamente celebradas, y hacer inmediatamente nueva convocatoria previo exacto cumplimiento de las vigentes disposiciones sobre materia electoral.

Y conformándose S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.º de Agosto de 1891.—Silvela.—Señor Gobernador de la provincia de Lugo.

(G. núm. 216).

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por D. Juan Rodríguez contra el fallo de esa Comisión provincial, que declaró nulas las elecciones municipales verificadas en Sentir el 10 de Mayo último:

«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto contra el fallo de la Comisión provincial de Salamanca, que declaró nulas las elecciones municipales verificadas en Sentir el 10 de Mayo último.

De los antecedentes resulta: que dichas elecciones se verificaron en un solo distrito y una sola sección, y que contra su validez reclamó en la junta general de escrutinio el candidato D. Juan Rodríguez, protestando de que en ellas no se hubiesen tenido en cuenta los artículos de la ley Municipal y Real decreto de 5 de Noviembre de 1890 relativos á la división de los términos municipales para las elecciones.

Reunido en sesión el Ayuntamiento en 23 de Mayo, acordó aceptar la protesta, y dispuso la remisión del expediente á la Comisión provincial.

Esta declaró nulas las elecciones, exponiendo como fundamento de su resolución que si bien no se había protestado contra su legalidad durante los ocho días que estuvieron expuestos al público los nombres de los electos, se había reclamado contra su validez en la sesión celebrada por la junta general de escrutinio; y que teniendo el pueblo de Sentir 817 residentes, y correspondiéndole, por tanto, ocho Concejales, y dos distritos para elegir en ellos votación independiente los cinco Concejales que debían entrar á formar parte de la Corporación.

Contra este fallo han recurrido en alzada ante V. E. parte de los Concejales electos, alegando que en el tiempo modo y forma prevenido por la ley, se

expusieron al público las listas de electores y elegibles, así como la designación de una sola mesa y distrito para la elección sin que se presentara reclamación ninguna; que la protesta formulada por D. Juan José Rodríguez ante la Junta general de escrutinio no debió ser atendida, porque dicha Junta solo puede entender de las protestas referentes al escrutinio, y no de las relativas á la elección, que por necesidad han de hacerse ante el Ayuntamiento en los ocho días que están expuestos al público los nombres de los electos y no antes ni después; que según parece se figuró después una sesión, en objeto de dar una apariencia de legalidad á lo ocurrido y de que no le fuese aplicable lo dispuesto en una circular de 14 de Mayo dirigida á los Alcaldes sobre nulidad de las elecciones que no se reclamasen dentro de los ocho días siguientes á la proclamación de los Concejales electos; que la Comisión provincial tuvo á la vista un acta de la sesión de la Junta general de escrutinio, que no va firmada por varios de los Secretarios escrutadores; que el Ayuntamiento no había dado cuenta á los electos de protesta alguna; de modo que no estando prevenidos no pudieron defenderse ante la Comisión provincial, y que el acuerdo de esta Comisión, si bien justo en el fondo, se opone al ritualismo de la ley, que da determinados plazos para reclamar contra la división de los términos municipales, pasados los cuales las elecciones que se hacen en la división acordada y no reclamada tienen la misma validez que si se hubiesen hecho en la que correspondía.

Con estos precedentes la Sección expondrá á la consideración de V. E. que el art. 49 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890 para adaptación de la ley de Sufragio universal á las elecciones municipales establece en su art. 49, que á medida que se vayan examinando las actas de las votaciones de las secciones, se podrán hacer y se insertarán en el acta de escrutinio las reclamaciones y protestas á que hubiere lugar sobre la legalidad de dichas votaciones, pudiendo hacer estas reclamaciones solamente los individuos de la Junta y los candidatos que estuvieren presentes. Como á continuación dispone dicho artículo, que la Junta no podrá anular ningún acto ni voto, y es por otra parte evidente que las protestas se han de resolver, es consecuencia lógica que hayan de ser sometidas al fallo de la Comisión provincial, en quien reside la competencia para fallar en primera instancia acerca de la validez ó nulidad de las elecciones.

Cierto es que el art. 4.º del Real decreto de 24 de Marzo de 1891, dispone que durante el plazo de ocho días en que deben estar expuestos al público los nombres de los electos, podrán los electores reclamar contra la validez de las elecciones sin que puedan hacerlo después; pero esta disposición no se opone á la del artículo 49 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890; pues de que los electores del término hayan de reclamar dentro de los expresados ocho días y no se sigue que los individuos de la Junta y candidatos concurrentes á ella no puedan protestar ante la misma.

Una vez que la protesta formulada contra las elecciones de Sentir fue hecha en tiempo hábil, y que, por tanto procede examinarla en el fondo, el fallo de la Comisión provincial de Salamanca resulta perfectamente ajustado á la ley, porque de los antecedentes aparece y los mismos recurrentes lo han reconocido, que la división del término en distritos no fue la que le correspondía con arreglo á las disposiciones del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890, ya costando de mas de 800 residentes, según el censo oficial de 1887, debió di-

vidirse en dos distritos, con votacion independiente en uno del otro.

Esta infraccion de lo dispuesto en el tit. 3.º del expresado Real decreto es suficiente motivo para la nulidad de las elecciones, segun disposicion terminante del art. 13 del mismo, que previene serán nulas las elecciones municipales en que no se hayan observado las disposiciones del mismo título.

Opina, por consiguiente, la Seccion que procede:

1.º Confirmar el fallo de la Comision provincial de Salamanca, que declaró nulas las elecciones verificadas en Sentir ultimamente.

2.º Disponer que las nuevas elecciones que hayan de verificarse en sustitucion de las anuladas, se ajusten estrictamente a lo dispuesto en el tit. 3.º del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890.

Y conformándose S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolucion del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Julio de 1891.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Salamanca.

(G. núm. 203.)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala segunda del Tribunal Supremo declarando no haber lugar al recurso de casacion admitido de derecho contra la que pronunció la Audiencia de Huércal Overa, en la cual se condena á Gabriel Perez Pedrosa á la pena de muerte por el delito de asesinato:

Teniendo en cuenta la buena conducta del reo antes de delinquir y su arrepentimiento posterior al delito:

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

Oídos la Sala sentenciadora y el Consejo de Estado, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar la pena de muerte á que fué condenado Gabriel Perez Pedrosa, por la inmediata de cadena perpétua.

Dado en San Sebastian á dos de Agosto de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernandez Villaverde.

Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por Antonio Pinto Sanchez pidiendo indulto de la pena de dos años, once meses y once dias de prision correccional que la Audiencia de Vélez Malaga le impuso en causa por los delitos de disparo de arma de fuego y lesiones:

Considerando que, aplicado al reo el art. 90 del Código, por constituir un solo hecho ambos delitos,

la condena resultó mas grave que si se hubiere penado los dos separadamente:

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora; con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en rebajar á un año de prision correccional la de dos años, once meses y once dias de la misma pena á que fué condenado Antonio Piton Sanchez.

Dado en San Sebastian á dos de Agosto de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernandez Villaverde.

Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por Rafael Mingoranza Lozano pidiendo indulto de la pena de dos años, once meses y once dias de prision correccional que la Audiencia de Albuñol le impuso en causa por los delitos de disparo de arma de fuego y lesiones:

Considerando que el reo ha sufrido dos quintas partes de su condena durante cuyo tiempo ah observado buena conducta y dado pruebas de arrepentimiento, y que el Fiscal en sus conclusiones definitivas pidió la ausolucion por creer que los hechos no eran constitutivos de delito.

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora; con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en indultar á Rafael Mingoranza Lozano del resto de la pena de dos años, once meses y once dias de prision correccional á que fué condenado en la causa de que va hecho mérito.

Dado en San Sebastian á dos de Agosto de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernandez Villaverde.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar por el turno 1.º de los establecidos en el decreto

ley de 13 de Octubre último, Jefe de Administracion de segunda clase, Administrador Central de Aduanas de la isla de Cuba, á D. Luis Guarnierio y Gomez, que con la clase inferior inmediata sirve el cargo de Administrador principal de Hacienda de la Habana, y figura con el núm. 1.º del escalafon.

Dado en San Sebastian á veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Ultramar, Antonio Maria Fabié.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar por el turno 1.º de los establecidos por el Real decreto de 13 de Octubre último, Jefe de Administracion de tercera clase, Contador de la Direccion general de Administracion civil de las islas Filipinas, á D. Juan Bautista Pacheco y Gonzalez, que es Administrador de Hacienda de Manila y ocupa el tercer lugar de la clase inferior inmediata del escalafon, y á quien corresponde dicho ascenso por haberlo renunciado los que figuran en el primero y segundo puesto del propio escalafon.

Dado en San Sebastian á veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Ultramar, Antonio Maria Fabié.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en trasladar á la plaza de Jefe de Administracion de cuarta clase, Administrador de Hacienda pública de Manila, en las islas Filipinas, á D. Manuel Lahora y Crespillo, que es Jefe de Administracion de la misma clase en propiedad y desempeña en comision el cargo de Jefe de Administracion de tercera clase, Contador de la Direccion general de Administracion civil de dichas islas.

Dado en San Sebastian á veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Ultramar, Antonio Maria Fabié.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el anticipo de cesantia que por enfermo concedió el Gobernador general de la isla de Cuba á D. Enrique de Borbon y Castelví, Jefe de Administracion de cuarta clase, Jefe de la Seccion de Fomento de la Direccion general de Administracion civil de dicha isla, declarándole cesante, con el haber que por clasificacion le correspondia.

Dado en San Sebastian á veintinueve de Julio de mil ochocientos

noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Ultramar, Antonio Maria Fabié.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar por el turno 1.º de los establecidos en el decreto ley de 13 de Octubre último, Jefe de Administracion de cuarta clase, Jefe de la Seccion de Fomento de la Direccion general de Administracion civil de la isla de Cuba, á D. Ramon Montalvo y Mantilla, Interventor de la Ordenacion de Pagos de dicha isla, que figura con el número 3.º del escalafon en la clase inferior inmediata y á quien corresponde el ascenso por haber sido nombrados Gobernadores civiles en Filipinas los que figuran con el número 1.º y 2.º del citado escalafon.

Dado en San Sebastian á veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Ultramar, Antonio Maria Fabié.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES DECRETOS

En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12 de Noviembre de 1886, de conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba como presupuesto adicional al de la contrata del trozo 3.º de la carretera de Pola de Laviana á Nava, por Bimenes, provincia de Oviedo, el exceso de la obra ejecutada, que asciende á 4 253 pesetas 43 céntimos.

Dado en San Sebastian á veintiseis de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12 de Noviembre de 1886, de conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el proyecto reformado de los trozos 1.º al 4.º de la carretera de la de Villacastin á Vigo á Leon por Benavente, provincia de Zamora, por su presupuesto de contrata de 126.837 pesetas 65 céntimos, que produce un adicional de 14.519 pesetas 34 céntimos.

Dado en San Sebastian á veintiseis de Julio de mil ochocientos no-

venta y uno.—Maria Cristina.—El Ministro de Fomento. Santos de Isasa.

ANUNCIOS OFICIALES

COMISION PROVINCIAL
DE EVALUACION Y REPARTIMIENTO DE IN-
MUEBLES DE ORENSE

Por el término de ocho días y durante las horas hábiles de oficina, queda expuesto al público en la Secretaría de la Comisión establecida en la Administración de Contribuciones de la provincia el repartimiento de la contribución territorial de este distrito á fin de que los contribuyentes puedan enterarse de las cuotas que en dicho documento se le consignan y entablar las reclamaciones que consideren pertinentes, por error de aplicación en el tanto por ciento á que salió gravada la riqueza del distrito; en inteligencia de que fenecido dicho plazo no serán admitidas las que con tal motivo pudieran producirse.

Orense Agosto 10 de 1891.—El Presidente, Urbano Gonzalez.

AYUNTAMIENTOS

Don Aquilino Gullás Miron, Secretario del Ayuntamiento de Beariz.

Certifica: que en el libro de actas que lleva la Corporación del mismo se halla escrita la que á la letra dice:

«Sesión extraordinaria del día 28 de Julio de 1891. Reunidos en este día en la casa que hace de sesiones para el Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Domingo Perez Muradás, los señores Concejales é individuos de la Junta municipal que suscriben. El Sr. Presidente manifestó á los concurrentes que el objeto de esta sesión era como lo expresaba ya por su orden de convocatoria cumplir lo que previene el Reglamento benéfico sanitario de los pueblos de 14 de Junio último, inserto en el *Boletín oficial* del día 20 de Junio último. Acto seguido por el Secretario de esta Corporación se dió lectura del citado Reglamento, y después de una larga y detenida discusión se acordó por unanimidad: primero, formar la lista de familias pobres del distrito que asciende al número de 49 y nombrar interinamente con arreglo á lo que dispone el art. 21 del citado Reglamento para la asistencia de dichas familias al Licenciado en Medicina y Cirujía D. Vicente Vazquez Martinez, con el haber anual de 500 pesetas. Segundo, acordar anunciar dicha vacante por el término de treinta días á contar desde la inserción en el *Boletín oficial* de la provincia, para nombrar en propiedad á aquél de los solicitantes que reúna mejores condiciones á juicio del Ayuntamiento y Junta de asociados con el mismo sueldo anual que el señalado para el interino; anunciándose asimismo y por igual término la lista de familias pobres para las reclamaciones á que haya lugar según el expresado Reglamento. Acordándose también nombrar la comisión especial compuesta del Sr. Alcalde, Procurador Síndico y el Concejal don Bernardo Lorenzo Muradás, para que formen el expediente y pliego de condiciones porque ha de regirse el contrato del Médico propietario.

Acto seguido: hallándose presente el Licenciado D. Vicente Vázquez Martinez y teniendo conocimiento del contrato interino arriba expresado y con el celebrado: se comprometió á

cumplirlo en todas sus partes, al igual que el Ayuntamiento y Junta de asociados; entregándole por estos una copia de la lista de familias pobres.

Incontinente: se acordó remitir copia de esta acta al Sr. Gobernador civil de la provincia á los efectos del citado Reglamento y otra para encabezar el expediente de referencia.

Con lo cual se dió por terminada el acta que firman dichos señores de que yo Secretario certifico.—Siguen las firmas.

Y para que conste y remitir al señor Gobernador civil de la provincia, expido la presente con el visto bueno del señor Alcalde en Beariz á 3 de Agosto de 1891.—Aquilino Gullás.—V.º B.º: Domingo Perez.

EDICTO

La plaza de Médico de este Ayuntamiento dotada con 500 pesetas anuales, para la asistencia de familias pobres; se halla vacante y desempeñada interinamente por el Licenciado en Medicina D. Vicente Vazquez Martinez; los señores Facultativos que deseen optar á la misma en propiedad, pueden presentar las solicitudes en la Secretaría de Ayuntamiento dentro del término de treinta días contados desde la inserción del presente en el *Boletín oficial* y con arreglo á lo que previene el Reglamento benéfico sanitario de 14 de Junio último; cuyo pliego de condiciones se halla de manifiesto en la Secretaría de Ayuntamiento durante las horas de oficina.

Por igual término de treinta días, se halla expuesta al público en el mismo local la lista de familias pobres.

Lo que se hace público á los efectos del citado Reglamento.

Beariz Agosto 4 de 1891.—Domingo Perez.

PUENTEDEVA

El proyecto de reparto de consumos y la distribución gremial del cupo de alcoholes y sus agregados en este distrito, para el ejercicio económico de 1891 á 1892, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento los ocho días siguientes al de la inserción del presente anuncio en el *Boletín oficial* de la provincia, durante los cuales se admitirán las justas reclamaciones que se presenten contra el mismo.

Puentedeiva Agosto 6 de 1891.—El Alcalde, Fernando Lorenzo.

Vacante la plaza de Médico titular de este municipio por traslación del que la desempeñaba, el Ayuntamiento y Junta municipal de asociados en sesión de hoy, acordó publicar su provisión, con la dotación anual de 75 pesetas, para la asistencia de las treinta familias pobres que existen en el término municipal; á fin de que durante los treinta días siguientes al de su publicación en el *Boletín oficial* de la provincia, puedan los aspirantes presentar las solicitudes en la Secretaría de la Corporación.

Puentedeiva Agosto 5 de 1891.—El Alcalde, Fernando Lorenzo.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

El Sr. D. Manuel Alonso Fernandez,

Juez de primera instancia accidental de la villa y partido de Ribadavia en nombre de S. M. la Reina Regente y de su Augusto Hijo Don Alfonso XIII (q. D. g.)

Por el presente llamo á todos los poseedores desconocidos y residentes en ignorado paradero para que el día veintidos del actual y hora de diez de su mañana, comparezcan á manifestar si están ó no conformes con que se verifique el apeo y prorrateo del foral titulado «Vilarifio», su renta un moyo de vino del dominio de don Antonio Wenceslao Mosquera, apercibidos que de no hacerlo por sí ó á medio de apoderado se les tendrá por conformes, con la práctica de dicho apeo y prorrateo.

Ribadavia Agosto tres de mil ochocientos noventa y uno.—Manuel Alonso.—De su orden, Evaristo Abrales.

En nombre de S. M. la Reina Regente y de su Augusto hijo (q. D. g.). El Licenciado D. Manuel Alonso Fernandez, Juez de primera instancia accidental de la villa y partido de Ribadavia.

Por el presente llamo á los poseedores desconocidos y residentes en ignorado paradero, para que el día veintidos del actual y hora de diez de la mañana, comparezcan á manifestar si están ó no conformes en que se verifique el apeo del foral titulado «Santiago Dieguez» su renta un moyo de vino tinto del dominio de D. Marcial Novoa de Eiras, apercibidos que de no hacerlo por sí ó á medio de apoderado, se les tendrá por conformes con la práctica de dicho apeo y prorrateo.

Ribadavia Agosto tres de mil ochocientos noventa y uno.—Manuel Alonso.—De su orden, Evaristo Abrales.

MUNICIPALES

Don Manuel Gomez Rodriguez, Juez municipal de Nogueira de Ramuin.

Hago notorio: que en ejecución de transacción celebrada en juicio verbal, para hacer pago por la vía de apremio de la cantidad de setenta y cinco pesetas é intereses que adeuda José Rodriguez y Rodriguez, vecino de Villouriz de Lofia, á Francisco Martinez Rodriguez, de Casdecid, en este municipio, se embargaron al deudor y saca á pública subasta los bienes que con su tasa se expresan á continuación:

Labradío al nombramiento de Chao, de quince áreas doce centiáreas; en setenta pesetas.—Labradío al de Carballo, de seis áreas veinte y nueve centiáreas; en cuarenta pesetas.—Labradío y monte en Tallos, de diez y ocho áreas veinte y siete centiáreas; en noventa pesetas.—Labradío en Piornedo de diez áreas cincuenta centiáreas; en cuarenta pesetas.—Huerta en Carballo de setenta centiáreas; en veinte pesetas.—La casa habitación del deudor compuesta de alto y bajo, señalada con el número 170 ocupa la superficie de treinta y seis metros cuadrados; en doscientas cincuenta pesetas. Radican en términos de dicho Villouriz. Se rematarán en la sala de audiencia de este Juzgado en Luintra el día veinte y nueve del entrante Agosto desde las diez de la mañana á favor del más ventajoso licitador que cubra las dos terceras partes de la tasa y á calidad de suplir por cuenta del precio del remate la falta de títulos de propiedad.

Nogueira Julio treinta y uno de mil ochocientos noventa y uno.—Manuel Gomez.—Ante mí, Enrique Prada, Secretario.

ANUNCIOS

GLOBOS

de papel seda en diferentes figuras, formas y tamaños á precios económicos.

Dirigirse á Eduardo Gomez, encuadernación, calle de Corona, 12, y de D. Juan de Austria, 13, Orense.

ARRIENDO

Las personas que deseen llevar en arrendamiento por frutos del presente año las rentas de todas clases que el Excelentísimo Sr. Duque de Alba, Conde de Lemos, percibe en las Administraciones de Castro Caldelas y Puebla de Trives, pueden pasar á informarse de las condiciones que se estipulan para el contrato, á la Notaría de D. Benito Rodicio en la Puebla de Trives, en donde estarán de manifiesto, y en cuyo punto tendrá efecto el remate el día 14 del actual de diez de su mañana á cuatro de la tarde.

Castro Caldelas 4 de Agosto de 1891.—El Administrador, Jesús Segundo Ogando. 6-5

REMATE

VENTA DE UNA CASA EN CELANOVA.—A voluntad de los herederos fiduciarios del finado don Nicolás Blanco Lozano, y en la Notaría de D. Pablo Martinez Lobato de esta ciudad, se vende en privada licitación una casa situada en la villa de Celanova y su calle Real con una huerta adyacente á la trasera, lindante por Naciente con la indicada calle, por Oeste y Sur con casa y huerta de Rosendo Gonzalez y D. Elias Reza y por el Norte con la de don Sebastian Losada.

El remate tendrá lugar á las once de la mañana del día 21 del corriente mes de Agosto bajo las condiciones que con los títulos se hallarán de manifiesto en dicha Notaría.